

Poder Judicial de la Nación
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
Sala VIII

Expediente N° CNT 35555/2024/CA1-CA2

<p>JUZGADO N° 51</p> <p>AUTOS: “SORIANO, JUAN IGNACIO C/ LA SEGUNDA ART S.A. S/ RECURSO LEY 27348”</p>

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de febrero de 2026, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

LA DRA. MARÍA DORA GONZÁLEZ DIJO:

I.- Contra la sentencia de primera instancia, que hizo lugar parcialmente a la demanda, vienen en apelación el trabajador, su representación letrada –por derecho propio- y la perito médica, estos últimos por estimar bajos sus honorarios.

II.- El reclamante se agravia, según las motivaciones que lucen inscriptas en su presentación recursiva, las cuales merecieron la contestación de La Segunda ART S.A.

III.- En concreto, cuestiona: a) que no se haya admitido el reclamo por incapacidad psicológica, la que fuera determinada por la perito médica legista, por R.V.A.N. grado II, en un 10% de la t.o., según el baremo del Decreto 659/96. Pide se reconozca este daño en toda su extensión, más una suma para afrontar el costo de su tratamiento; b) la aplicación del método de la capacidad restante para determinar su incapacidad laboral. A su decir, se aplicó dicho método por el accidente del 13.07.2018, sentencia dictada en el Expediente 7490/23 Soriano c/ Galeno (donde se estableció incapacidad laboral del 3,66% de la t.o), que no se encuentra firme. Por ello, solicita se deje sin efecto su aplicación al sub lite; c) el valor del ingreso base y, al respecto, la interpretación del art. 12 de la L.R.T. Para su cálculo pide se aplique la variación del índice RIPTE desde el accidente hasta la fecha del efectivo pago. Cita, en su relación, una sentencia de

Poder Judicial de la Nación
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
Sala VIII

Expediente N° CNT 35555/2024/CA1-CA2

la Sala I, donde se aplicó el Decreto 669/19 y d) la tasa de interés prevista para el capital de condena (tasa activa) y su forma de aplicarse. En tal sentido, expresa que dicha tasa de interés no permite cubrir la desvalorización monetaria (por efecto de la inflación) ni los componentes moratorios y compensatorios requeridos. Agrega que no se mantiene indemne el valor adquisitivo del capital de condena. Cita el precedente “Barrios” de la SCBA También señala que la tasa activa no alcanza para resguardar el crédito. Remite, a tal fin, a una sentencia del registro de esta Sala, in re “Villanueva” del 01.08.2024, donde se aplicó el CER. Expresa que dicho proceder más una tasa de interés pura permite superar la tasa activa ordena en grado.

IV.- Adelanto que el recurso obtendrá parcial andamio.

En orden al primer agravio, corresponde señalar que existen precedentes de esta Sala referidos al daño psicológico en los accidentes “in itinere” (conf. sentencia de fecha 27/02/2019 in re “González Julio Luis c/ Compañía Argentina de Seguros Victoria s/ Accidente –Ley Especial Expte.CNT 72321/CA1; sentencia de fecha 22/03/2019 in re “Salazar, Emiliano José c/ Asociat SA ART s/ Accidente-Ley Especial”, entre muchas otras) que obstan al progreso de esta pretensión recursiva.

Sobre el tema, mi distinguido colega, el Dr. Pesino expresó:
“Me permito destacar que, en mi criterio, el daño psíquico no puede ser indemnizado en el marco de un accidente in itinere, pues el mismo fue provocado por un tercero y, en todo caso, la reacción del sujeto afectado lo es con respecto a factores externos del trabajo, que nada tienen que ver con los daños físicos que el legislador puso a cargo de la ART, por la sola circunstancia que el trabajador que se dirige a su empleo sufra una contingencia cubierta por la Ley”, cuyos fundamentos comparto en este caso.

Las razones que anteceden, me conducen, sin más, a desestimar las objeciones formuladas al respecto.



Poder Judicial de la Nación
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
Sala VIII

Expediente N° CNT 35555/2024/CA1-CA2

A mayor abundamiento, la petición sobre los gastos que tendría que afrontar el trabajador para un tratamiento psicológico, será rechazado ya que no se encuentra previsto en la L.R.T. la sustitución de las prestaciones en especie por una suma dinero (conf. art. 20 in fine).

Con relación al siguiente agravio, señalo que conforme surge del pronunciamiento de grado, no se aplicó, en la especie, el método de la capacidad restante por el accidente del 13.07.2018 sino por el ocurrido el 21.09.2016, Expediente N° 110301/2016, , donde se estableció para el Sr Soriano una incapacidad psicofísica del 19,86% de la t.o., sentencia del registro del Juzgado N° 49 del fuero, que se encuentra firme y en la etapa de ejecución (cfr. sistema de gestión, Lex 100).

Por lo que procede la aplicación de dicho método en este caso, al contar el trabajador, a la fecha del infortunio de marras, con una capacidad restante del 80,14% de la t.o. (100% menos 19,86%=). Por lo expuesto, la incapacidad física del 10%, representa sobre dicha base el 8,014 % de la t.o.

Ahora bien, se advierte -en este caso- un error de cálculo, ya que al adicionarse los factores de ponderación se utilizó el producto del cálculo anterior, sobre la incapacidad psicofísica del 19% de la t.o. y no sobre la determinada en el 8,014% de la t.o.. Por ello, corresponde recalcular dichos factores de ponderación (conf. art.104 de la L.O. y Fallos: 317:1845; 312:570).

Esta operación arroja un subtotal de 1,6829 (FACTORES DE PONDERACIÓN: DIFICULTAD PARA TAREAS HABITUALES: MODERADA 10%= 0,8014 + AMERITA REUBICACIÓN: SÍ 10%= 0.8014 + EDAD: 1 % = 0,08014. =). En síntesis, el total de la incapacidad física del trabajador equivale al 9,6969% de la t.o. (8,014 + f.p.1,6829=).



Poder Judicial de la Nación
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
Sala VIII

Expediente N° CNT 35555/2024/CA1-CA2

En cuanto al valor del ingreso base corresponde precisar que no resulta procedente, la aplicación al sub lite del Decreto 669/19 (pub. B.O. 30/09/2019), en atención a que este Tribunal se expidió sobre la inconstitucionalidad del citado DNU en el Expediente N° CNT 8227/2021 de fecha 02/05/2023 en los autos “*Rapetti, Florencia c/ Berkley Internacional ART S.A. s/ Recurso Ley 27348*”, a cuyos argumentos me remito en obsequio a la brevedad.

La modificación sugerida en orden al porcentaje de incapacidad del trabajador me conducen a realizar una nueva liquidación del capital de condena.

En tal sentido, el trabajador resulta acreedor a la indemnización prevista en el art. 14 inciso 2° apartado “a” de la L.R.T. (por el accidente “in itinere” ocurrido el 04.08.2023, choque de atrás, latigazo cervical, cuya secuela fue una cervicobraquialgia con alteraciones clínicas, radiológicas y electromiograficas (cfr. conclusiones del dictamen pericial médico) a la suma de \$ **5.870.586,39.-** (53 x VIB \$ 755.662,37 x incapacidad física del 9,6969 % de la t.o. x 65/43=), calculada a agosto de 2023, la cual supera el mínimo legal indemnizatorio de \$ 1.123.854,90.- (cfr.Res. SRT 12/23 art. 2°, para el período 01/03/2023 al 31/08/2023-, \$ 11.589.837 x 9,6969%=), por lo que se debe estar al primer importe, que acrecerá con intereses.

Respecto a los accesorios de condena, el agravio resulta admisible.

Al sentenciar la causa “[MACHUCA, RAFAEL HERNÁN c/ GALENO ART S.A. s/RECURSO LEY 27348](#)”¹ (Expte. 32376/2022; SD del 6 de marzo de 2025), esta Sala destacó -previo recordar la inaplicabilidad del Decreto 669/19- que la utilización de la tasa activa -negativa en los últimos años-, para calcular los intereses en este tipo de acciones, implicaba una

¹ <https://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=1hvQ2FRU6zbEJZq3CndgxiORR0cKKIS1r5Snwg%2FH1q8%3D&tipoDoc=sentencia>



Poder Judicial de la Nación
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
Sala VIII

Expediente N° CNT 35555/2024/CA1-CA2

confiscatoriedad del crédito del trabajador -devengado en una evidente situación de emergencia- con grave afectación del derecho de propiedad.

El procedimiento de la ley fue establecido en la inteligencia de que las indemnizaciones deberían ser pagadas en un plazo relativamente breve. Pero la realidad demostró lo contrario y lo cierto es que su cancelación suele producirse varios años después, lo que evidencia que la intención del legislador fue abandonada, perjudicándose a quien se quería beneficiar.

Por último, en la causa aludida, se ejemplificó el perjuicio que le causaba al trabajador la percepción de su indemnización mucho tiempo después, situación que se replica en la presente causa, obviamente considerando parámetros similares.

Por ello y demás argumentos expuestos en la sentencia referida, que aquí se dan por reproducidos en homenaje a la brevedad, propongo se declare la inconstitucionalidad de los apartados 2° y 3° del artículo 12 de la ley 24557 -según la redacción del artículo 11° de la ley 27348- y se determine que, al crédito del trabajador, se le adicione como interés moratorio, el CER, desde la fecha de su exigibilidad **(04/08/2023)**.

Sin embargo, justo es reconocer que, desde hace más de un año, los índices que miden el costo de vida o la inflación, vienen mermando considerablemente, lo que permite vislumbrar que las tasas de interés están volviendo a cumplir con su función reguladora de la inflación, en una economía más estable.

Desde esta óptica, no considero prudente mantener *sine die* la utilización del CER, como tasa de interés, por advertir que ese procedimiento puede llevar a la obtención de resultados desproporcionados, comparados con el valor de los créditos a la época en que se devengaron.



Poder Judicial de la Nación
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
Sala VIII

Expediente N° CNT 35555/2024/CA1-CA2

En consecuencia, sugiero que para el capital de condena se utilice el CER como tasa de interés desde el 04/08/2023 hasta el 31 de diciembre de 2023 ya que a partir del 1° de enero de 2024, al resultado que se obtenga se deberá adicionar los intereses del Acta 2658 de esta Cámara (tasa activa efectiva anual vencida, Cartera General Diversas del Banco Nación) hasta el efectivo pago.

Desde esta perspectiva, devienen inoficioso tratar el planteo de inconstitucionalidad del art. 7° de la Ley 23.928.

V.- A influjo de lo normado en el art. 279 del C.P.C.C.N., corresponde dejar sin efecto los pronunciamientos sobre costas y honorarios y proceder a realizar una determinación originaria de dichos ítems. Motivo por el cual resulta abstracto analizar los agravios vertidos al respecto.

VI.-En definitiva, postulo en este voto: se modifique parcialmente la sentencia apelada y se fije el nuevo capital nominal de condena en **\$5.870.586,39.-**, que acrecerá desde el 04.08.2023 con los accesorios dispuestos en los considerandos que anteceden y según el procedimiento allí indicado; se dejen sin efecto los pronunciamientos sobre costas y honorarios (art. 279 del C.P.C.C.N.); se impongan las costas de primera instancia a la ART reclamada vencida en lo sustancial (art. 68 del C.P.C.C.N.), se regulen los honorarios de la representación letrada del reclamante, de La Segunda ART S.A. y de la perito médica legista en 60,11 UMA, 53,34UMA y 17,13 UMA, equivalentes-en ese orden- a \$5.107.125,93-, \$4.531.926,42.- y \$1.455.735.-, en función de la importancia, mérito y extensión de sus trabajos, en sede administrativa y en primera instancia (conf. art. 38 de la L.O., Ley 27.423 y Res SGA 3160/2025); se impongan las costas de Alzada en el orden causado, atento la índole de la cuestión debatida, resultado obtenido y particularidades de autos (art. 68, 2° párrafo, del C.P.C.C.N.); se regulen los honorarios de la representación letrada del



Poder Judicial de la Nación
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
Sala VIII

Expediente N° CNT 35555/2024/CA1-CA2

reclamante y de La Segunda ART S.A., por sus trabajos en esta instancia, en el 30% de lo asignado por la anterior (art. 30 de la Ley 27.423).

EL DR. VÍCTOR A. PESINO DIJO:

Que, por análogos fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el **TRIBUNAL RESUELVE:**

I.- Modificar parcialmente la sentencia apelada y fijar el nuevo capital nominal de condena en **\$5.870.586,39.-**, que acrecerá desde el 04.08.2023 con los accesorios dispuestos en los considerandos que anteceden y según el procedimiento allí indicado.

II.- Dejar sin efecto los pronunciamientos sobre costas y honorarios.

III.- Imponer las costas de primera instancia a la ART reclamada.

IV.- Regular los honorarios de la representación letrada del reclamante, de La Segunda ART S.A. y de la perito médica legista en 60,11 UMA, 53,34UMA y 17,13 UMA, equivalentes-en ese orden- a \$5.107.125,93-, \$4.531.926,42.- y \$1.455.735.-, por sus trabajos, en sede administrativa y en primera instancia (Ley 27.423 y Res SGA 3160/2025).

V.- Imponer las costas de Alzada en el orden causado.

VI.- Regular los honorarios de la representación letrada del reclamante y de La Segunda ART S.A., por sus trabajos en esta instancia, en el 30% de lo asignado por la anterior.

Regístrese, notifíquese, publíquese y, oportunamente, devuélvase.

19/02.01

MARÍA DORA GONZÁLEZ
JUEZA DE CÁMARA

VICTOR ARTURO PESINO
JUEZ DE CÁMARA



Poder Judicial de la Nación
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
Sala VIII

Expediente N° CNT 35555/2024/CA1-CA2

Ante mí:

CLAUDIA ROSANA GUARDIA
SECRETARIA

